

Disyuntivas demográficas y políticas de bienestar

Sergio Díaz-Briquets

Desde un punto de vista demográfico, adquirir y disponer de los recursos físicos y humanos necesarios para responder a las necesidades de bienestar de la población en la tercera edad se complica por tres razones fundamentales: a) el número de las personas de la tercera edad que requerirán servicios; b) los tipos de servicios necesarios y su cuantía a medida que los ancianos envejecen; y, c) cómo acomodar ajustes secuenciales asociados con vaivenes históricos en la fecundidad.

Los procesos demográficos, lenta pero inexorablemente, tienen gran incidencia sobre las políticas sociales, en particular aquellas diseñadas para incidir sobre el bienestar general. A medida que la situación demográfica en Cuba se hace más incierta debido al continuo descenso de la fecundidad, las autoridades evidencian una mayor preocupación en cuanto a las medidas de política económica y social que se puedan tomar para revertir dicha tendencia que, en combinación con la emigración, ha dado lugar a la ya en marcha contracción en el número de habitantes del país. En términos absolutos, la población cubana comenzó a decrecer en 2017, a medida que el número de personas en la tercera edad crece vertiginosamente. El objetivo aquí es considerar qué se puede esperar de las iniciativas públicas diseñadas para influir sobre estos procesos poblacionales y, de este modo, poder evaluar sus efectos sobre las personas en la tercera edad. El proceso de transformación económica, asociado con el recientemente anunciado ordenamiento monetario, realza el significado de estas políticas, aunque es difícil prever en la actualidad como éstas serán impactadas.

Cuba, renuente a reconocer los desafíos que el envejecimiento poblacional conlleva, inicialmente reusó admitir que la situación demográfica del país requería la formulación de políticas apropiadas para esa nueva realidad. Solo a principios de la pasada década el gobierno reveló que se tomarían medidas, las cuales empezaron a anunciarse gradualmente. Las medidas iniciales se ajustaban a un reordenamiento de políticas sociales por el cual se asumía que, aliviando los rigores del cuidado infantil, las mujeres cubanas estarían en mejor disposición de tener más hijos. Ya para el año 2014 comienzan a tomarse medidas más proactivas, siempre enmarcadas dentro de un plano de satisfacer una demanda médico-social, aunque con un evidente objetivo

demográfico. A partir del año 2015 las políticas a favor de la natalidad evidencian un nada ambiguo objetivo demográfico, ya que ponen en marcha iniciativas que incentivan a las mujeres para que procreen con más frecuencia. Además, se estudia profundizar estas medidas gradualmente cuando se anuncia (en 2019-2020) que docenas de iniciativas adicionales estaban bajo consideración, siendo la más significativa el establecimiento de un fondo habitacional de \$50 millones de CUC para construir viviendas a favor de madres con tres o más hijos. En su conjunto, el paquete de medidas es ambicioso y consistente con el abanico de incentivos utilizados en muchos países ricos para promover un alza en la natalidad.

Es aún temprano, sin embargo, como para poder hacer un juicio definitivo sobre la efectividad que puedan tener dichas políticas. A pesar de que son recientes para Cuba, se puede hacer una valoración preliminar con base al resultado que medidas similares han tenido en otros países. De modo general, puede concluirse que las expectativas deben ser modestas ya que, si bien en ciertas circunstancias han tenido éxito, en otras, los logros han sido marginales. Las excepciones se han producido en aquellas ocasiones las políticas han estado acompañadas de inversiones cuantiosas. Esto es, los incentivos ofrecidos por los gobiernos han sido lo suficientemente generosos como para compensar a las madres por los costos económicos, sociales y psíquicos asociados con una familia más numerosa. En el caso cubano, esto constituye un gran desafío, no solo por el precario estado de la economía nacional, sino también porque la provisión de incentivos fiscales con fines demográficos está en contraposición con la estrategia gubernamental de reducir subsidios en general para fomentar el crecimiento económico.

Desde un punto de vista demográfico, adquirir y disponer de los recursos físicos y humanos necesarios para responder a las necesidades de bienestar de la población en la tercera edad se complica por tres razones fundamentales: a) el número de las personas de la tercera edad que requerirán servicios; b) los tipos de servicios necesarios y su cuantía a medida que los ancianos envejecen; y, c) cómo acomodar ajustes secuenciales asociados con vaivenes históricos en la fecundidad.

En cuanto a la primera temática, las necesidades de bienestar en la tercera edad evolucionan en función a un sin número de factores entre los cuales se encuentran la incidencia de enfermedades degenerativas y como éstas varían en función del género, estilos de vida precedentes (obesidad, falta de ejercicio, dietas inadecuadas, alcoholismo, tabaquismo, etc.), condiciones económicas (monto de las pensiones) y sociales (apoyo familiar) actuales, etc.

Todos estos factores, a su vez, son influenciados por el envejecimiento progresivo de los individuos en la tercera edad, al grado que convencional-

mente esta se divide en segmentos - dependiendo del contexto nacional y condiciones de salud imperantes - entre ancianos jóvenes (aquellos entre 60 y 69 años de edad), ancianos (de 70 and 79 años), y ancianos mayores (con más de 80 años). Estas categorías representan un continuo que va desde la vida independiente con relativa salud, hacia una que requiere un nivel cada vez más elevado de apoyo debido a la pérdida gradual de facultades, hasta llegar al punto en que las necesidades asistenciales llegan a un crescendo bajo el cual la vida independiente se hace difícil con el consiguiente deterioro en la salud. Ya que el nivel de apoyo requerido y los costos de salud aumentan progresivamente en función del envejecimiento, estos últimos crecen geométricamente a las edades más avanzadas. Los ancianos mayores acaparan un porcentaje desproporcionado del gasto total de salud.

El último punto a considerar, aunque no exclusivo en la experiencia contemporánea mundial, son los vaivenes en la estructura etaria cubana en el tiempo. Como se señaló, estos son resultado del “baby boom” de los años 60 y principios de los 70, y los efectos subsiguientes en las generaciones que le siguieron (aproximadamente cada 20 años), y con repercusiones en las siguientes generaciones, a pesar de la disminución en la fecundidad. Los efectos de estas fluctuaciones en el tamaño de dos generaciones de cubanos son apreciables y requerirán de ajustes en el tiempo.

Así como el gobierno ha iniciado una serie de políticas públicas encaminadas a contribuir al aumento de la natalidad, las autoridades también han anunciado medidas diseñadas para responder a las necesidades de una población que envejece. Estas políticas se basan parcialmente en los resultados de encuestas de envejecimiento que sugieren intervenciones prioritarias desde las ópticas sociales y de salud pública. En consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades están ampliando programas de capacitación - así como las instalaciones - destinadas a ofrecer servicios a las personas en la tercera edad. Aparte del establecimiento o fortalecimiento de centros especializados (por ejemplo, para el estudio y tratamiento de pacientes con Alzheimer), se están elaborando protocolos especializados para mejorar la atención hospitalaria a personas mayores. Estas políticas son complemento de otras iniciativas de índole financiera diseñadas para aliviar las penurias que agobian a los ancianos más necesitados.

A pesar de la intención de estas políticas, el cuadro que enfrentan es poco alentador debido a las condiciones económicas imperantes en el país, aun antes de los embates del Covid-19. A menos que la situación económica mejore de manera muy favorable, las condiciones de vida de las personas mayores se harán todavía más críticas, tal y como lo revelan las encuestas de envejecimiento.

El último punto a destacar es que dentro de la crisis que se avecina, la mujer cubana está destinada, por tradición cultural, a jugar un papel crucial. Como en casi todas las culturas, particularmente en culturas de raíces “mediterráneas” – la mujer ha sido responsable del cuidado de los hijos, así como también de generaciones anteriores. Estos patrones culturales de antigua data, aunque evolucionando en el mundo moderno, todavía asignan un papel secundario al hombre con respecto a las responsabilidades familiares. Este estado de cosas sigue caracterizando a Cuba, donde el “machismo” perdura con relativa constancia.

Este inmovilismo social es curioso ya que, a pesar de más de seis décadas de un proceso político y socioeconómico que radicalmente transformó las estructuras institucionales del país, solo ha logrado socavar parcialmente valores fuertemente enraizados en la cultura nacional. A la par con la discriminación racial cuya presencia se percibe en distintas manifestaciones, la evidencia sugiere que el muy renombrado avance sociocultural de la mujer cubana no llegó tan lejos como comúnmente se asume. Esto se refleja no solo en la preservación de obligaciones familiares tradicionales, sino también en sus relativamente bajas tasas de participación en la actividad económica. Aunque la tasa de participación laboral femenina en Cuba aumentó durante las últimas décadas, aún se mantiene por debajo de los niveles de otros países latinoamericanos, a pesar de que recientemente el gobierno decretó un aumento en la edad de jubilación (en el caso de las mujeres, de 55 a 60 años).

El tema de la participación femenina en la actividad económica reviste considerable importancia con respecto al potencial de las políticas a favor de la natalidad, tanto como por su incidencia sobre el sostenimiento económico y social de las cohortes de cubanos en edad avanzada. Lo que más llama la atención es que los bajos niveles de fecundidad en Cuba no necesariamente responden, como frecuentemente se asume, al que la condición de madre entre en conflicto con un alto grado de participación económica. Obviamente otros factores inciden, estando, entre los más relevantes, el pobre desempeño económico y la escasez crónica de viviendas adecuadas.

Esta realidad sugiere varias cosas. Primero, que las probabilidades para que las medidas a favor de un alza en la natalidad tengan éxito seguirán siendo exiguas mientras las condiciones económicas actuales perduren. En el muy lejano caso que estas políticas fueran exitosas, en el corto plazo no contribuirían en lo más mínimo a aliviar los problemas asociados con el bienestar de los ancianos necesitados, mientras que complicarían la carga de la mujer cubana en función de su rol tradicional como sostén fundamental de la familia. Segundo, que un eventual incremento en la participación laboral femenina podría, en cierta medida, paliar futuros déficits laborales asociados con el cese del crecimiento demográfico que bien pudiera fre-

nar el crecimiento económico necesario para sostener a una población cada vez más envejecida. La última consideración, de gran significado para la temática del bienestar, son las disyuntivas que implican los dos ejes demográficos prioritarios en las perspectivas poblacionales inmediatas. El éxito o fracaso de estas políticas, a favor de una mayor fecundidad, y a favor de un alza en la tasa de participación femenina en el mercado laboral, recaerá en la mujer cubana y en detrimento de los ancianos ya que son ellas sobre las cuales muchos dependen.